

Informe 0516/2008

La consulta plantea si tienen el carácter de datos personales y si es posible la cesión de los que cita por parte del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Cuenca consultante al Ayuntamiento de esta ciudad sin el consentimiento de los afectados titulares de dichos datos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

I

En primer lugar, para dar respuesta a si los datos referidos en la consulta (datos bancarios de número de cuenta corriente, NIF e identificación de sus titulares, domiciliación de recibos y expedientes en vía de apremio, entre otros) son datos personales, hay que atender a la definición de nos da de los mismos el artículo 3 a) de la Ley Orgánica 15/1999 que dice: "Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables." Así mismo esta definición se ve completada por el artículo 5. 1 f) del Real Decreto 1720/2007 que desarrolla la Ley y que define como dato de carácter personal "cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a las personas físicas identificadas o identificables."

No define la Ley Orgánica 15/1999 qué debe entenderse por persona identificable, sin embargo la Directiva 95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre, de la que es una transposición la citada Ley, en el apartado a) de su artículo 2 nos dice que se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. En términos similares se ha recogido dicha definición en el Real Decreto 1720/2007 cuyo artículo 5. 1 o) señala: "Persona identificable: toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará identificable si dicha información requiere plazos o actividades desproporcionados."

Es reiterada la consideración del DNI como dato de carácter personal por parte de esta Agencia Española de Protección de Datos y el resto de los datos solicitados por el Ayuntamiento de Cuenca, constituyen datos de información económica que permiten fácilmente asociarlos a su titular, por lo que les sería de aplicación la Ley Orgánica 15/1999.

II

La transmisión de los datos que refiere la consulta supondrá una cesión de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, como “toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”. Tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal que según dispone el artículo 11.1 de la citada Ley Orgánica, “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. Esta disposición se ve complementada en el supuesto que ahora nos ocupa por lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica, del cual se desprende que será posible la cesión cuando una Ley lo permita.

Dado que la cesión se realizará en el presente supuesto entre dos órganos de la Administración Pública Local, el Ayuntamiento y la Diputación, debe analizarse si procede la aplicación del artículo 21.1 de la LO 15/1999 según el cual “ Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo, cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.” Y en su número 4 señala que “En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo no será necesario el consentimiento del afectado a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley.”

Lo decisivo es la prohibición expresa de que los datos se comuniquen para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas a aquellas que motivaron la recogida de los datos, de modo que para que pueda procederse a la cesión descrita en la consulta sin el consentimiento de los interesados, la petición de datos formulada por el Ayuntamiento debería determinar con claridad que los datos se solicitan para el ejercicio de competencias sobre la misma materia, sin que en el escrito de consulta se especifique la finalidad a la que pretende destinar los datos el citado Ayuntamiento, siendo especialmente relevante a estos efectos que la cesión se amparase en el ejercicio de competencias tributarias, lo que parece muy probable si atendemos a que los datos cuya cesión se solicita a la Diputación se refieren únicamente a los “contribuyentes” de la ciudad de Cuenca.

Debe recordarse, al tratar de este artículo que la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre ha declarado contrario a la Constitución y nula la previsión que contenía el artículo 21.1 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, según la cual la cesión entre Administraciones Públicas resultaba posible cuando la comunicación hubiere sido prevista por las Disposiciones de creación del



fichero o por Disposición de superior rango que regule su uso, por cuanto viene a considerar que la reserva de Ley prevista con carácter general por la Ley Orgánica 15/1999 para la cesión de datos de carácter personal ha de considerarse igualmente predicable en los supuestos de cesión de datos entre Administraciones Públicas, siendo contraria a la Constitución la posibilidad de habilitar dicha cesión con base en una norma de rango reglamentario.

De este modo, la citada Sentencia considera que, en caso de que una norma con rango de Ley no dé cobertura a una cesión entre Administraciones Públicas, la misma sólo podrá tener lugar como consecuencia del ejercicio por cedente y cesionaria de unas mismas competencias.

En el supuesto de que no fuera aplicable a este caso el artículo 21.1 de la LO 15/1999, porque los datos fueran a utilizarse por el Ayuntamiento para el ejercicio de competencias sobre diferentes materias, la cesión deberá cumplir lo previsto en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 que dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.

Y el número 2 del mencionado artículo regula una serie de supuestos en los que se excluye la necesidad de recabar el consentimiento. Así, la consulta planteada podría encajar en el apartado a) pues se excluye la necesidad de recabar el consentimiento, cuando una ley autorice la cesión.

III

En relación con los ficheros de naturaleza tributaria, debe señalarse que, en este último supuesto, el artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consagra el principio de que “para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de Derecho público debe percibir la Hacienda de las Entidades locales, de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes”.

Ello supone que, en el ejercicio de sus competencias, resultarán de aplicación a las Haciendas Locales las mismas prerrogativas que la Ley General Tributaria atribuye a la Hacienda Estatal, lo que tiene una enorme trascendencia en lo que se refiere a la aplicación de las normas reguladoras de la protección de datos de carácter personal.

Así, en relación con la cesión de datos de aquellas personas que figuran como contribuyentes serán de aplicación en este caso las previsiones



contenidas en el artículo 95 de la Ley 57/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuyo apartado primero establece:

“Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:

- a) La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público.
- b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.
- c) La colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social para el correcto desarrollo de los fines recaudatorios encomendados a la misma.
- d) La colaboración con cualesquiera otras Administraciones públicas para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea.
- e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido
- f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público
- g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de la Administración tributaria
- h) La colaboración con los Jueces y Tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes. La solicitud de información exigirá resolución expresa, en la que previa ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado lo demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes o derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la Administración tributaria.
- i) La colaboración con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.
- j) La colaboración con el Servicio Ejecutivo creado por la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, en las actividades que dicho servicio lleve a cabo en el ámbito de lo previsto en el artículo 1 de la mencionada Ley.”

De ello se desprende que los datos sometidos a tratamiento para finalidades de trascendencia tributaria únicamente podrán ser cedidos a los Órganos de la Corporación Municipal que ostenten competencias en dicha materia, sin que sea posible su utilización por otros Órganos o dependencias salvo en los supuestos en que la Ley diera cobertura a dicho tratamiento.



Por último, y en respuesta a si sería ilegal solicitar el consentimiento previo a la cesión de datos aunque éste no fuera necesario, hay que decir que dicha conducta no aparece tipificada como infracción en ninguno de los supuestos recogidos por el artículo 44 en relación con los artículos 43 y 46 de la Ley Orgánica 15/1999, por lo que desde la óptica de la protección de datos no sería sancionable.

Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal,